

**LA RSE DE LAS EMPRESAS PETROLERAS: EVALUACIÓN DE ESTRATEGIAS
PARA LA REDUCCIÓN DE LOS ÍNDICES DE POBREZA DEL SECTOR RURAL EN
EL POSTCONFLICTO EN LA REGIÓN DEL CATATUMBO**

EDNA MAYELY CUBILLOS DIAZ *cód. 2202947*
EVELIN DAYAN SANCHEZ RAMIREZ *cód. 2203557*

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

Facultad de ciencias económicas

Administración de empresas

Bogotá D.C

2018

**LA RSE DE LAS EMPRESAS PETROLERAS: EVALUACIÓN DE ESTRATEGIAS
PARA LA REDUCCIÓN DE LOS ÍNDICES DE POBREZA DEL SECTOR RURAL EN
EL POSTCONFLICTO EN LA REGIÓN DEL CATATUMBO**

EDNA MAYELY CUBILLOS DIAZ *cód. 2202947*
EVELIN DAYAN SANCHEZ RAMIREZ *cód. 2203557*

Director
JORGE ISAAC MURILLO

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
Facultad de ciencias económicas
Administración de empresas
Bogotá D.C
2018

Tabla de contenido

	Pág.
1. Planteamiento del problema.....	4
2. Justificación.....	6
3. Objetivos	7
3.1 General	7
3.2 Específicos.....	7
4. Marco de referencia	7
4.1 Marco teórico	8
4.2 Estado del arte.....	10
5. La función de la Responsabilidad social empresarial en los contextos del postconflicto	13
5.1 Causas del conflicto armado en Colombia	13
5.2 La Responsabilidad Social Empresarial-RSE en el postconflicto	16
6. La Responsabilidad Social Empresarial y su rol en la reconstrucción social y económica del Catatumbo	21
6.1 Situación económica y social del Catatumbo	21
6.2 Actividades petroleras en el Departamento de Norte de Santander.....	26
Conclusiones	32
Bibliografía	34

1. Planteamiento del problema

El sector rural colombiano ha estado sumergido en una crisis de pobreza como respuesta a un desequilibrio social que se materializa en la insatisfacción de las necesidades y requerimientos básicos de las personas. Dicha situación se asocia con diferentes factores y circunstancias que responden a la dinámica histórica arraigado a las características sociales, económicas, sociales y culturales (Pérez & Pérez, 2002).

De acuerdo a las cifras presentadas por el Departamento Nacional de Planeación (DANE), para el año 2012 la pobreza en el sector rural era del 46.8%; porcentaje que supera drásticamente los índices en el área urbana que es del 28.4%; a lo cual se le suma hechos agravantes como que el 26.3% de la población son analfabetas; el 84.9% solo tiene estudios primarios y el 93% no cuenta con un empleo formal (Departamento Nacional de Planeación, 2015).

El problema de pobreza anteriormente descrito es el resultado del fracaso de las diferentes reformas agrarias; aspecto que se ratifica ante el rezago tecnológico, la alta exposición a la competencia, la falta de asistencia técnica, las altas tasas de interés que los bancos ofrecen como solución de financiamiento a los campesinos, tasas que incluso superan las que rigen el sector urbano; la decadente infraestructura de las vías de comunicación y las políticas anti agrarias que tan solo es una parte de las deficiencias o factores que promueven el fenómeno de pobreza (Perry, 2010).

Ahora bien, no solo se debe mencionar que la falta de gestión gubernamental es la promotora de la crisis que en la actualidad vive el sector rural colombiano; los hechos de violencia e inseguridad generalizada como parte del conflicto armado ha ocasionado que los inversionistas no decidan incorporar su capital en proyectos productivos que saquen del rezago tecnológico y de infraestructura al campo (Parra, Ordoñez, & Acosta, 2013).

En consecuencia, con lo anterior y tras la firma del acuerdo de paz del gobierno colombiano con el grupo guerrillero de las Farc-EP; se abre una nueva esperanza para los campesinos; quienes ven en el postconflicto una oportunidad para reivindicar el papel del sector rural en el desarrollo económico y social del estado; más para esto se hace necesario incorporar el accionar de la industria nacional, especialmente las grandes compañías; quienes deben apostar desde la responsabilidad social empresarial a la reestructuración de dicho sector. Por ende, se plantea como pregunta de investigación:

¿De qué manera las grandes compañías del sector petrolero y desde la concepción de la responsabilidad social empresarial, promueven la reestructuración económica y social del sector rural colombiano, de forma que se logre reducir los índices de pobreza, esto bajo el marco del postconflicto y el acuerdo de paz con las Farc-EP en la región del Catatumbo?

2. Justificación

El proceso de paz firmado entre el grupo guerrillero de las Farc-EP y el gobierno colombiano le puso fin a uno de los conflictos internos más largos de la historia de la humanidad que se extendió por más de cincuenta años. Tras la consolidación del mismo, han surgido grandes cuestionamientos sobre la sostenibilidad y el cumplimiento en sí de los acuerdos, especialmente respecto a las víctimas mismas del conflicto armado y sus derechos a la reparación integral y la reestructuración del sector rural colombiano.

Con base a lo anterior, se ha hecho un llamado especial a la labor de las empresas en la reestructuración de la sociedad colombiana, especialmente en torno al sector rural; el cual ha estado sumido en el olvido estatal a través de su historia. Este hecho es fácilmente confirmado a partir de cifras de fenómenos tan comunes como la analfabetización que alcanza un porcentaje del 18% de la población rural, las precarias condiciones de las estructuras viales que comunican al campo con las cabeceras municipales, limitando no solo la comercialización de sus productos sino también el acceso a derechos tan elementales como la salud.

Ahora bien, debe mencionarse que la magnitud de la problemática es tan compleja que el Estado en sí es incapaz de solventar las necesidades que prevé la población rural, hecho que enfatiza la importancia de promover el interés de las empresas por aportar herramientas y elementos que les posibilite al campo colombiano salir de la crisis que lo aqueja, esto bajo la parametrización de la responsabilidad social empresarial.

Desde el ámbito educativo, el alma mater esta llamada a proveer soluciones a la problemática social que enfrenta las sociedades, de allí el interés de este trabajo investigativo de establecer medidas que le permita al sector rural colombiano salir de la crisis económica y social que ha atravesado a lo largo de su historia como respuesta al olvido estatal.

3. Objetivos

3.1 General

Determinar las estrategias a implementar por parte de las compañías del sector petrolero en el proceso de reestructuración del sector rural bajo el marco del postconflicto, acorde con la concepción de la RSE.

3.2 Específicos

- Evaluar la función de la responsabilidad social empresarial como parte de la reincorporación y reestructuración de la sociedad colombiana, enfocado en las empresas del sector petrolero que se ubica en la región del Catatumbo.
- Analizar el capítulo especial sobre “Reforma Rural Integral” del acuerdo de paz e identificar los aspectos alineados con responsabilidad social empresarial
- Plantear líneas de acción de RSE para compañías petroleras que operan en la región del Catatumbo, orientadas a la reestructuración del sector rural, bajo el marco del posconflicto y la reducción del índice de pobreza multidimensional.

4. Marco de referencia

4.1 Marco teórico

La descripción de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) se remonta al siglo XIX, ello bajo el marco del cooperativismo y el asociacionismo, que tenía como función conciliar o equilibrar la eficacia empresarial con los principios sociales de democracia, apoyo a las comunidades y la justicia distributiva.

La responsabilidad social surge en el momento en que la globalización comienza a pedirle a las naciones mayores capacidades de satisfacción de las demandas de sus ciudadanos. Ante ello, en los años 50, en Estados Unidos un grupo de activistas religiosos decidieron no apoyar ni invertir en aquellas compañías que sus productos o servicios hicieran peligrar el tejido moral de la sociedad, pues lucrarse de ello es algo catalogado como no ético (Vergara & Vicaría, 2009).

Hacia 1970 y tras los fenómenos de mundialización y escándalos de corrupción en algunas multinacionales, se dio un segundo momento trascendental de la responsabilidad social empresarial. Se empezó a cuestionar los modelos tradicionales de hacer empresa, ante lo cual Peter Drucker cita a Milton Friedman para afirmar que “El objetivo de las corporaciones es maximizar y optimizar sus niveles de beneficios económicos” (Friedman, 1970). Frente a ello, Drucker afirma que:

“Es una futilidad argumentar, como hace el economista y premio Nobel Milton Friedman, que una empresa sólo tiene una responsabilidad: los resultados económicos. Conseguir esos resultados es la primera responsabilidad de una empresa, y la que no obtiene unos beneficios por lo menos iguales al coste de capital es socialmente irresponsable; despilfarra los recursos de la sociedad. Pero el rendimiento económico no es la única responsabilidad de una empresa, como tampoco el rendimiento académico es la única responsabilidad de una escuela (Drucker, 1985)”

Por su parte Maslow, propone una especie de pirámide, la cual está basada en las diferentes necesidades del ser humano, jerarquizadas en cinco dimensiones que incluye desde las más básicas a las más complejas: Fisiológicas, seguridad, afiliación, reconocimiento y autorrealización. Este conjunto de necesidades son esenciales para la satisfacción y motivación de los trabajadores al interior de las organizaciones, ante lo cual la satisfacción de las mismas debe convertirse en un campo de práctica de la responsabilidad social que dirija el trabajo con y para los empleados (Maslow, 1954).

Frederick Winslow, Taylor y Henri Fayol, de igual forma propusieron afrontar un compromiso con el trabajador desde la compañía y gerencia. Taylor de forma específica afirma que el trabajador necesita conseguir su máxima prosperidad al interior de la empresa, con lo cual esta última lograría la máxima prosperidad (Taylor, 1995). Fayol por su parte se dedicó a la sistematización del comportamiento referencial a partir de cuatro principios: la remuneración personal que busca la satisfacción justa y garantizada de los empleados, la equidad, la estabilidad y duración en el cargo y el espíritu de equipo (Fayol, 1981).

El uso y conformación de los reportes o informes RSE son de gran importancia para las compañías, pues como lo afirman los expertos que fueron objetos de un estudio por parte de la GRI, estos llevan a mejorar la imagen y reputación de las empresas (59%), de igual forma se convierte en una herramienta de comunicación indispensable. Ante esto, la GRI afirma que el propósito de la GRI es la “medición, divulgación y rendición de cuentas frente a grupos de interés internos y externos en relación con el desempeño de la organización con respecto al objetivo de desarrollo sostenible”. Ante esto, la principal motivación que dan los expertos sobre la mejora de la imagen y de la reputación, no está inscrita por la GRI como propósito elemental que debe estar dentro de estos documentos (Mediaresponsable, 2011).

Por su parte Baltazar dice que la responsabilidad social empresarial se puede entender como una filosofía corporativa, la cual es adoptada por la alta dirección de las empresas, con la cual busca actuar en beneficio de sus empleados, sus familias y el entorno social en aquellas regiones o sitios de influencia de las compañías.

Ante esto, una empresa socialmente responsable es aquella que sus productos y servicios contribuyen al bienestar de la sociedad, su comportamiento va más allá del cumplimiento normativo vigente y las prácticas de mercado, sus directivos tienen bases sólidas éticas, sus actividades son respetuosas con el medio ambiente y promueve el apoyo a las personas más desfavorables de las comunidades en las que opera. Al contemplar los criterios descritos por Baltazar, un informe RSE es en esencia un documento que contempla la evaluación de todo este conjunto de variables (Baltazar, 2003)

De acuerdo con Cajiga (2010), la responsabilidad social empresarial se convierte en una nueva manera de gestionar y hacer negocios, en el cual las empresas se ocupan de que sus operaciones sean sustentables en términos económicos, social y ambientales, reconociendo los intereses de los diferentes grupos con los que estos se asocian o relacionan. En este orden de ideas,

se busca el preservar el medio ambiente y hacer sustentable la vida a las generaciones futuras. Es así que la RSE es una visión de negocios en el que se integra el respeto por las personas, los valores éticos, la comunidad y el medio ambiente con la gestión misma de la empresa, ello de forma independiente de los productos o servicios que se ofrece, del sector, del tamaño o nacionalidad de la compañía (Cajiga, 2016).

En términos de las estrategias de la RSE, estas se consideran como el conjunto de herramientas para la gestión de los asuntos importantes en temas sociales, ambientales y económicos; en los cuales se expone la visión, los principios y las políticas de una organización; en el que además se establece el enfoque de gobernanza, la participación de los grupos de interés y la conformación de canales de comunicación. En esta medida, las estrategias de sostenibilidad promueven el entusiasmo, la conciencia y alineamiento a todos los niveles de la organización, con lo que se ayuda a hacer la empresa más responsable y sostenible.

Uno de los elementos que se aborda con las estrategias de RSE es la pobreza multidimensional, el cual es un indicador que identifica las diferentes carencias a nivel de los hogares y las personas en los ámbitos de la salud, la educación y el nivel de vida. Para ello, se hace uso de encuestas de los hogares en el que cada miembro de una familia se puede clasificar como pobre o no de acuerdo al número de carencias que experimente al interior de su hogar. Así mismo el índice en mención refleja tanto la prevalencia de las carencias multidimensionales como su intensidad.

Por último y asociado con el tema de interés, se establece que el postconflicto alude al periodo de tiempo que sigue a la superación total o parcial de los conflictos armados. En esta medida, se puede entender como un concepto de único atributo: la disminución del número de homicidios asociados con el conflicto por debajo de un umbral determinado, que le entrega o niega el estatus de conflicto activo.

4.2 Estado del arte

Son diferentes las investigaciones desarrolladas en torno a la evaluación de la responsabilidad social empresarial (RSE) aplicable al sector rural. A continuación, se describe algunas de estas.

Bajo la experiencia del postconflicto y el restablecimiento del sector rural; en el caso puntual del Salvador, la economía mostraba una inestabilidad entre 1960 al año 2000, presentando

una tasa promedio de crecimiento del 3% anual; dicho fenómeno se debió en parte al impacto negativo del conflicto armado de los ochenta, periodo en el cual la economía registraba un decrecimiento anual de 2.1%.

Ya hacia 1989 y en la fase final de las negociaciones entre el Estado y la guerrilla, El Salvador incorporó una serie de políticas económicas direccionadas a promover la economía de mercado. En la primera etapa, se intentó estabilizar la economía por medio de la creación de políticas macroeconómicas e incentivos microeconómicos que desembocasen en el establecimiento de una tasa económica de crecimiento.

Uno de los principales factores que generaron la recuperación de la economía en el Salvador, fue la desviación de los recursos que eran anteriormente usados en labores militares, y la recuperación de la infraestructura objeto de los atentados, cifra que alcanzó los US\$1,500 millones (IMF, 1998). Sumado a lo anterior, se logró reducir los índices de pobreza en 20 puntos porcentuales en comparación al momento en que se inició el fin del conflicto.

Respecto a Perú; en cuanto a los programas dispuesto tras la desmovilización del grupo guerrillero enfocados en el sector rural, estos se centralizaron principalmente en el apoyo a la inversión en capital humano para la oferta (educación bilingüe intercultural) y para la demanda (programas de desayunos escolares), seguido de programas de mercados para la producción multi-mercados y mini-mercados y la transferencia de activos e insumos para la producción. En dicha medida, el valor de la inversión en esta clase programas alcanzó los 458.2 millones de dólares.

Los principales promotores del sector privado que financian el renglón rural en Perú corresponden a los organismos intergubernamentales, quienes financian grandes proyectos de inversión en los sectores que lo requieran. Bajo esta premisa, gran parte de los proyectos que se realizan corresponden a convenios de préstamo con una importante componente de contrapartida nacional.

Desde estas perspectivas, las intervenciones de los organismos en el sector agropecuario se dan por medio de AgroRural. Así mismo, las organizaciones con mayor presencia en el Perú corresponden al Banco Mundial, el BID (financia PROSAAMER de AGRORURAL), el FIDA (financia Sierra Sur, Sierra Norte y Sierra Sur II) y la FAO, que se constituye principalmente a través de cooperación técnica.

Nope (2008) en su trabajo de investigación denominado “Responsabilidad Social Empresarial Aplicaciones En El Sector Agropecuario”, analiza el concepto y las prácticas en torno

a la RSE y su desarrollo en el sector agropecuario colombiano. De acuerdo con el autor, la RSE posee un enfoque sistémico que promueve el entendimiento de los problemas del campo, conformando soluciones estructuradas dentro del considerado enfoque metodológico del pensamiento.

En consecuencia, para lograr darle solución a los problemas de índole social y agrario, es indispensable el entender los problemas del pasado, presente y futuro; la forma como se deben negociar los acuerdos comerciales, el de hacer el agro colombiano en sí una empresa productiva y competitiva en el orden mundial. Aun así, el logro de tal objetivo parte del conocimiento, actitudes y prácticas aplicables a la producción; aspectos que desde la responsabilidad social empresarial en las compañías agropecuarias no se ha logrado solventar (Nopel, 2008).

Olivella (2009) en su trabajo “De La Responsabilidad Social Empresarial Y Su Articulación Política Para La Educación De Los Niños Del Sector Rural Fundación Escuela Nueva: Volvamos A La Gente”; estudia la articulación pública privada enfocado en proyectos de educación rural para los niños, tomando como base el modelo de Escuela Nueva y la labor desempeñada por la fundación Volvamos a la Gente. De acuerdo con el autor, es posible el desarrollar un proyecto de beneficio ambivalente para las empresas y para las instituciones públicas en torno a los procesos educativos (Olivella, 2009).

González (2013) en su investigación “Los efectos sociales y económicos de la responsabilidad social empresarial en una organización de hidrocarburos el municipio de Puerto Gaitán (meta). El caso de las veredas Santa Bárbara y Guasipaty entre 2009 y 2011”, analiza los efectos sociales y económicos de la implementación de la RSE por parte de la Asociación Caracara compuesta por las compañías Cepcolsa y Ecopetrol, las cuales tienen su campo de acción en los pozos petroleros del municipio de Puerto Gaitán en el departamento del Meta.

El autor se centró en el análisis de las acciones, planes y proyectos implementados como parte de la inversión social, determinando la percepción y puntos de vista de los miembros de la comunidad en torno a la labor desempeñada por la compañía. Con base en esto, se estableció que la percepción de la comunidad no es del todo positivo, puesto consideran que lo que estas realizan lo hacen simplemente con el objetivo de cumplir las normativas y se centran en el cumplimiento básico de las necesidades, problemática que a su vez es potencializada por la falta de integración entre los planes de desarrollo municipal y los proyectos promovidos por la empresa (González, 2013).

Villafán (2014) en su investigación “Responsabilidad social de las empresas agrícolas y agroindustriales aguacateras de Uruapan, Michoacán, y sus implicaciones en la competitividad”, plantea la RSE como una contribución para solucionar los problemas de la agroindustria. El autor buscó conocer el nivel de RSE de las compañías aguacateras de Uruapan, elaborando para tal objetivo un índice de RSE basado en el modelo Cemefí y el método de valoración multicriterio de proceso analítico jerárquico (AHP).

De acuerdo a los resultados, se obtuvo un nivel medio de RSE (51.58%), un nivel alto en la calidad de vida de 63.22%, un nivel medio en ética empresarial 47.85%, un nivel bajo en vinculación con 22.95% y un nivel bajo en medio ambiente de 24.15% (Villafán, 2014).

Calderón y Castro (2014) por su parte en la investigación “Acciones de responsabilidad Social Empresarial de las Agro-Empresas ganaderas del municipio de Puerto López, (Meta)”, determina las acciones de RSE implementados en las Agro-Empresas ganaderas del municipio de Puerto López, ante lo cual se estableció que los principales programas se centran en las actividades de reciclaje, reforestación, cuidado de las cuencas hídricas, la ayuda económica de los empleados y la inversión en las instalaciones para los mismos.

Por otra parte, los autores encontraron que muchas empresas agroindustriales y ganaderas de Puerto López implementan planes de responsabilidad social, aunque estos no poseen o tienen un concepto claro en torno al mismo. Gran parte de los agroempresarios que elaboran dichos planes son propietarios de las empresas y cuentan con terrenos que en promedio no superan las 12 hectáreas (Calderón & Castro, 2014).

5. La función de la Responsabilidad social empresarial en los contextos del postconflicto

5.1 Causas del conflicto armado en Colombia

El conflicto armado colombiano es producto de una serie de problemáticas que se han extendido a lo largo de su historia. Ante ello, Zubiría (2015) considera que una de las principales

causas asociadas con el conflicto colombiano es el auge neoliberal, aunque no existe una función causal directa entre las mismas.

Y es que este mismo autor considera que los modelos neoliberales promueven las sociedades desiguales; con mayores índices de empleo y subempleo, aspecto que incrementa el número de pobres y las brechas socioeconómicas entre las clases. Así mismo, las condiciones de vida y la movilidad social se ven perjudicada, llevándose a reducir los derechos políticos y sociales del ciudadano por el mercado.

Por otro lado, y respecto a la continuidad del conflicto, este es producto de la conformación de nuevos elementos derivados de la problemática del narcotráfico y la conformación de grupos paramilitares que aún bajo otra denominación siguen actuando en el país. Así mismo, la renovación de estrategias por parte de las organizaciones subversivas, la ejecución de acciones contra las víctimas a quienes se les restituye las tierras de las que fueron desalojadas, el incremento de la delincuencia urbana, los problemas de parapolítica, la participación de los agentes del Estado contra las poblaciones violando los derechos humanos, las transformaciones capitalistas que promueven el desarrollo de los sectores minero-energéticos en contra de los recursos naturales, son otros elementos detonantes que amplían y le dan continuidad a los procesos de violencia (Zubiría, 2015, Pág. 113).

Por estos motivos, Zubiría considera de gran importancia el promover medidas de intervención distintas a las militares para hacerle frente al conflicto armado colombiano; ello a través de lo que denomina una democracia real en el que se incorpore no solo a las organizaciones armadas insurgentes desmovilizadas, sino también a todos aquellos movimientos que no comparten la organización social capitalistas; conllevándose a las transformaciones que supongan un equilibrio político para la nación.

En el caso de no poderse lograr este equilibrio, se proseguirá en un proceso de violencia similar al que se vive en la actualidad, ocasionándose una serie de problemáticas como lo son:

- La profundización y ampliación de la crisis de legitimidad del Estado; quien ha demostrado contradicciones y limitaciones en la búsqueda de soluciones constitucionales a la problemática de violencia.
- El aumento de la conflictividad social que hace inviable la resolución de las dificultades de la población colombiana, perpetuando el conflicto armado interno.

- La promoción de la resistencia, luchas y protestas contra el modelo neoliberal interpuesto por el gobierno colombiano.
- La criminalización de la protesta social, las luchas populares y la promoción del terrorismo de Estado.
- El debilitamiento de la democracia, las estructuras políticas y la vida cultural en las regiones y comunidades colombianas (De Zubiría, 2014).

Pécaut complementa las posturas anteriores respecto a las causas del conflicto armado colombiano, asegurando que, durante los años anteriores a la violencia, dos rasgos aspectos claves diferenciaron la historia de la nación en contraste de otros países de América Latina resaltaban. Por una parte, lo que él denomina, “el ‘civilismo’, que se asocia con el predominio de las élites sobre la institución militar; y, por otro lado, la precariedad de la simbología nacional”. Sumado a los hechos anteriores, se suman la adhesión de la población a los dos partidos políticos tradicionales (liberal y conservador) que pasaron a convertirse en dos subculturas políticas íntimamente enfrentadas. De igual forma, se presenta la adopción por parte de las élites de un modelo liberal de desarrollo abierto al contraste de las movilizaciones nacional-populistas que dominaron el panorama latinoamericano (Pécaut, 2015; Pág. 21).

En concordancia con lo dispuesto por Vega (2015), una de las causas promotoras que desencadenó la violencia en Colombia la injerencia de los Estados Unidos, esto relacionado con una estructura de terrorismo de Estado. Ejemplo de ello, resulta del análisis de los hechos conocidos como la Masacre de las Bananeras, evento en el cual el ejército colombiano usa sus armas para asesinar a un conjunto de trabajadores que se encontraban en huelga. Dicha acción fue responsabilidad del general Carlos Cortes Vargas, quien en la noche del 5 y 6 de diciembre de 1928 ordenó asesinar a los obreros con el fin de satisfacer a la compañía estadounidense United Fruit Company, ello como parte de la defensa de los intereses del capital extranjero, tal y como lo señala el exdirigente asesinado Jorge Eliécer Gaitán: “se trataba de resolver un problema de salarios por medio de la bala de las ametralladoras del gobierno” (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013, Pág. 34).

El modelo anterior, es editado por el ejército colombiano en un libro en el que se hace apología a la tortura y se incorpora los preceptos de la doctrina contrainsurgente: “En la guerra irregular, una de las mejores fuentes de información son los prisioneros, cuando se les da el *tratamiento debido y son interrogados por personal especializado*”. Así mismo y con la intención

de fortalecer el modelo contrainsurgente, en 1962 el Equipo del Centro del Ejército de Estados Unidos visita a cuatro de las ocho brigadas del país con el objetivo de evaluar la efectividad de las operaciones contrainsurgentes y establecer las asistencias que se requerían (Camacho & Ucrós, 2009, Pág. 53).

Darío Fajardo y Julio Estrada (2015) coinciden en afirmar que en la década de 1920 se dieron los primeros enfrentamientos violentos a raíz de la lucha por la tierra, la cual constituye el problema fundamental del conflicto. Darío Fajardo coloca el factor agrario como el desencadenante de los enfrentamientos entre el estado y las guerrillas, ello basados en las formas de apropiación de las tierras baldías y la ausencia de legitimidad de la propiedad.

Debido a las formas de apropiación de la tierra derivada de las épocas coloniales y agravadas luego de las reformas de mediados del siglo XIX, las formas de apropiación monopólica y excluyente de la tierra se impusieron sobre esta estructura de la propiedad agraria, restringiendo el desarrollo de la mediana y la pequeña propiedad (Fajardo D. , 2015; Pág. 8)

Por tal motivo empezaron a posicionarse algunos sectores dirigentes como liberales y conservadores. Con la propuesta de una distribución favorable y menos desequilibrada de la tierra, a partir de entonces empezó a tomar cuerpo las contradicciones de los dos partidos, donde un partido político estaba a favor de la gran propiedad y el otro a favor de la distribución igualitaria de las tierras.

5.2 La Responsabilidad Social Empresarial-RSE en el postconflicto

Colombia atraviesa por una etapa en la cual es necesario mejorar las condiciones sociales de las poblaciones que durante años han estado sujetas al olvido Estatal. Dichas mejorías se logran por medio de la implementación de herramientas de bienestar y generando oportunidades laborales para las personas que fueron de forma directa o indirecta víctimas del conflicto armado o los mismos actores quienes necesitan de mayores oportunidades para reincorporarse a la vida civil.

Por este motivo y desde la alta gerencia es relevante evaluar la manera como los objetivos empresariales basado en la responsabilidad social empresarial fomenta o proyecta la reincorporación y reestructuración de la sociedad colombiana; especialmente en temas asociados con las condiciones sociales y laborales de las poblaciones víctimas del conflicto armado.

Bajo esta perspectiva surge la necesidad de implementar programas que incorporen iniciativas que promuevan desde la RSE una mayor cobertura de la estructuración del posconflicto

en Colombia, para lo cual se debe tomar como precedente el modelo de integración social direccionado desde la alta gerencia de las organizaciones, siendo los gerentes los encargados de orientar, nivelar y estructurar los programas que de forma paralela satisfagan las necesidades de la empresa y promuevan la conformación de una sociedad en la que se vincule al personal que estuvo en la ilegalidad como parte de la reintegración social del Estado. Y es que la promoción de oportunidades laborales les permite a los actores armados su reinserción en la sociedad y a su vez el sentirse útiles a la sociedad.

En consecuencia para alcanzar un Estado Social de Derecho como lo resulta ser Colombia, es necesario garantizarle a los ciudadanos las mismas oportunidades y derechos; aspectos que promueven el precepto del postconflicto y la firma del acuerdo de paz con la guerrilla de las Farc-EP; la construcción de una paz duradera; pero esto solo es posible si se genera un cambio en las condiciones económicas y sociales de las poblaciones víctimas del conflicto armado y a su vez la población en general; quienes le otorgaran al gobierno un nivel de confianza acorde a su vez el interés de las inversiones extranjeras quienes promoverán oportunidades laborales que permiten el desarrollo del país (Galindo, 2016).

Bajo dicha postura, Restrepo (2013) asegura que la RSE en Colombia debe partir de la conformación de compañías transparentes, “la RSE debe iniciar adentro del negocio por medio de compañías bien gobernadas, transparentes, éticas en sus actuaciones, con procesos que minimizan los impactos negativos en el ambiente, en las personas y en la sociedad, pero que también optimizan sus relaciones con los actores sociales a quienes sus operaciones pueden impactar, negativa o positivamente.”

En los casos contrarios, las organizaciones que no desempeñen acciones socialmente responsables, repercuten de manera negativa en las sociedades; aspectos que se materializan en problemas como la corrupción, políticas débiles, descontento generalizado, entre otros. En el caso de programas propicios de RSE, este desemboca en la producción de beneficios positivos al medio ambiente, a los recursos naturales, sociales y humanos.

En Colombia el concepto de RSE sigue manteniendo un precepto erróneo, puesto que muchas empresas no priorizan en sus políticas programas de intervención puesto que consideran que las mismas lo que hace es incrementar los gastos y no generan utilidades netas. A ello se suma el hecho de que algunas cuando lo hacen, solo buscan cumplir con las obligaciones legales y

fiscales sin ni siquiera evaluar que si lo que hacen realmente promueven un impacto positivo y promueve el desarrollo que realmente establecen las políticas de RSE.

Por este motivo, es que autores como Guédez (2002) afirma que las compañías poseen la responsabilidad de cooperar en la solución de problemas que se asocian con los miembros de la comunidad donde operan, ya que no hay forma de desvincularse del espacio y tiempo donde dichas compañías desarrollan sus actividades. De allí que la realidad las obliga a hacer parte de la solución no sólo de los problemas medioambientales, sino también de problemas del orden social como la pobreza, la inseguridad, educación, acceso a la educación y salud, entre otros.

En términos del conflicto armado colombiano, esta trata de una guerra que según Wallace (2013) es asimétrica de baja intensidad que se desarrollada desde los años de 1960. En dicho orden, los protagonistas que hacen parte de tal conflicto corresponde al Estado colombiano, las guerrillas de extrema izquierda y los grupos paramilitares de extrema derecha.

Ahora bien, la historia del conflicto se remonta a la época bipartidista que se dio a finales de 1940 producto de la independencia de la Nueva Granada de España y la conformación de una pugna sobre el modelo de Estado adaptado al país. En concordancia con Pérez (2011), el conflicto colombiano:

Obedece a dinámicas políticas, económicas y sociales de carácter estructural, que generan un número significativo de víctimas marginadas históricamente por la acción política, la redistribución de los recursos económicos y los procesos de integración de las políticas sociales propuestas por el Estado (Pérez T. , 2001).

En dicho orden, las inclusiones sociales de las empresas promueven el cierre de las brechas emocionales y económicas de quienes han sido víctimas de la violencia, esto a través de la implementación de modelos gerenciales que se orientan a la interpretación de la productividad bajo el enfoque participativo, superando limitantes como el regionalismo y fronteras (Vecino, 2015). Así mismo, las empresas poseen una responsabilidad ética y social con las comunidades, siendo está más que una obligación legal, una de carácter moral; por medio del cual se construya los mecanismos que aseguren la inclusión social y a su vez la incorporación de los actores del conflicto armado al mundo laboral (Vecino, 2015).

Ahora para alcanzar tal precepto es indispensable el aporte económico de las empresas, recursos que se deben orientar a los programas de educación y de gestión del talento humano, a

través del cual se lleve a la formación humana e integral de los partícipes del conflicto armado; elemento que contribuye a la estabilidad social y al mejoramiento de la productividad de la nación

Para ello pienso que es necesario el aporte económico de las empresas para el desarrollo de programas de educación y de gestión del talento humano, que permitan la formación humana e integral de los actores del conflicto armado y le garantice inserción al mundo laboral, a su vez contribuyendo a la estabilidad social de los mismos y al incremento de la productividad del país.

Otro de los campos de acción de la RSE en temas del postconflicto se relaciona con la inclusión social, la cual es usada como estrategia para reducir las diferencias emocionales y económicas de quienes han sido víctimas de la violencia, por lo que se obliga a las empresas establecer modelos gerenciales direccionados a interpretar la productividad desde unas perspectivas más participativas.

En este orden, desde la RSE se promueve la inclusión de políticas laborales en la que se impulse ante todo y de forma explícita al inicio programas de capacitación, por medio del cual se incluya la habilitación profesional y técnica de los reinsertados, tal y como lo asegura Burgos (2016):

Es indispensable una campaña agresiva de habilitación profesional y técnica, de cara al mercado laboral, teniendo en cuenta criterios de pertinencia y calidad, para que la vinculación sea sostenible. De lo contrario puede suceder que las empresas contraten a algunos para cumplir una obligación, pero que no se desarrollen o respondan a las expectativas de desempeño y sean luego despedidas (Burgos, 2016).

Ahora, bajo esta premisa es necesario que se conforme una relación entre el gobierno y los empresarios, quienes en conjunto deben poner de su parte para que los compromisos en torno a los procesos de reparación y reincorporación sean exitosos. Por ende, son tres los ejes fundamentales en los cuales los gobiernos y las organizaciones deben centrarse con el fin de asegurar la inserción de los actores del conflicto:

- Los procesos de resocialización e inducción al mundo empresarial, en el cual se provean las herramientas y criterios que conlleve a la realización personal y profesional.
- La generación de confianza, elementos esenciales en la relación profesional. Este eje se ha convertido en un desafío para los empresarios y trabajadores, quienes

deben dejar de ver a los desmovilizados como delincuentes, aceptándolos como empleados.

- Educación y capacitación en concordancia a lo dispuesto en el artículo 54 de la Constitución política de Colombia, por medio del cual se promueve la preparación, capacitación y formación para que dichas personas ingresen al mundo empresarial (Barrios, 2014).

Para que las empresas o sector privado promueva la reconstrucción social del Estado, es necesario que las mismas conozcan y comprendan integralmente el contexto del conflicto y el postconflicto en el que se da el desarrollo de la actividad empresarial. En dicho orden es necesario conocer las causas, la forma en que se desarrolló, los actores arraigados y las consecuencias del conflicto.

De acuerdo con las Naciones Unidas, la constitución de una alianza público-privada alude al conjunto de relaciones voluntarias y de colaboración entre partes, públicas y privadas, en las que todos establecen el colaborar para lograr un objetivo común o desarrollar una tarea concreta, al igual que compartir los riesgos y las responsabilidades, los recursos y las ventajas.

Bajo esta consideración, las alianzas son una relevante herramienta que posibilita el abordar los procesos reconstrucción en el marco del postconflicto, puesto que posibilita el combinar la perspectiva local con la global. En este orden, las alianzas son primordiales para la conformación de iniciativas que prescriben soluciones en función del desarrollo de las capacidades locales a través de un apoyo explícito como en el caso de la reconstrucción postconflicto.

Así mismo, la conformación de las alianzas o de cooperación empresarial articulan los conocimientos, experiencias y recursos potenciando los esfuerzos locales a medio plazo. Ahora, los retos a los que se enfrentan las sociedades en el postconflicto sólo se puede abordar a través de la colaboración de los distintos actores y centrando la atención a las fuentes y métodos usados para desarrollar los diálogos con los Stakeholders.

Desde el punto de vista de Prandi y Lozano (2010), las políticas de RSE desde los ámbitos económicos y sociales y que se asocian con la conformación de preceptos de paz poseen dos objetivos: uno económico, relacionado con la creación de oportunidades de subsistencia y emprendimiento y otro de índole el social, que dirime la exclusión social producto del conflicto. De allí surge la afirmación de estos autores, quienes aseguran que por medio de la RSE “las empresas pueden contribuir a reparar las fracturas sociales entre las comunidades enfrentadas

propiciando actividades económicas conjuntas que deberán ser diseñadas con gran cautela y desde el conocimiento profundo del conflicto y de sus consecuencias (Prandi y Lozano 2010, p. 47).

Ahora, para poder alcanzar los objetivos de la RSE, las empresas deben actuar bajo una serie de líneas que son en su naturaleza no excluyentes. Dichas líneas corresponden a:

- Facilitar formación técnica y en valores, especialmente respecto a los derechos humanos y paz.
- Subcontratar a colectivos que hicieron parte del conflicto a través de un acompañamiento y la atención personalizada de los actores.
- Promover alianzas con las comunidades locales y sus organizaciones políticas, económicas y sociales, para de esta manera impulsar el desarrollo comunitario en las regiones más afectadas.

Bajo esta consideración, la RSE incorpora la existencia de tres ejes fundamentales o características; la primera es que es un criterio voluntario; así mismo incorpora en sus actividades temas en torno a la preocupación social y medioambiental y por último, promueve la toma de decisiones compartidas con los actores sociales de su entorno como son empleados, proveedores, el estado, clientes, consumidores, etc (Sepúlveda, Moreno, Tovar, Franco, & Villarraga, 2015)

6. La Responsabilidad Social Empresarial y su rol en la reconstrucción social y económica del Catatumbo

6.1 Situación económica y social del Catatumbo

El Catatumbo es una subregión ubicada en el departamento de Norte de Santander; extendiéndose a lo largo de la Cordillera Oriental y el Lago de Maracaibo. Dicha región está conformada por un total de once municipios: Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, Ocaña, San Calixto, Teorama, Sardinata y Tibú; encontrándose estos dos últimos municipios entre los mayores seis productores de cocaína en el país; elemento que promociona al negocio de la droga como una actividad de gran relevancia en la solvencia de las necesidades económicas y sociales del departamento.

Desde el contexto humanitario, el Departamento de Norte de Santander registra una tendencia de concentración demográfica en los centros urbanos, al igual que ocurre en el resto del país. Uno de los hechos más críticos alude al desplazamiento generado por el conflicto armado que ocasiona altos índices de miseria en ciudades como Ocaña y Cúcuta; afectando gravemente la estructura económica, productiva y social de la región.

Y es que de acuerdo con lo dispuesto por la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos; se registran constantemente ataques y amenazas contra la población civil que son atribuidos a grupos al margen de la ley como la guerrilla, los paramilitares y bandas emergentes.

Y es que la presencia de grupos al margen de la ley ha creado un fenómeno de reclutamiento forzado, el uso de minas antipersonas y remanentes explosivos. Bajo esta consideración, la región del Catatumbo se ha constituido en una zona de colonización y de disputa entre actores como el Frente 33 de las Farc, el Frente Guerra Nororiental del ELN, el EPL, los grupos de Autodefensas desmovilizados que se han identificado como nuevos grupos como los Pelusos, las Bacrim, entre otros.

Y es que la importancia del Catatumbo para los grupos al margen de la ley radica en tres razones:

- La explotación petrolera en la región ha promovido la conformación de la extorsión a las empresas petroleras y a las personas que viven de esta economía.
- La extensión de la frontera, que hace del Catatumbo un lugar de paso obligado para la salida de la droga hacia Venezuela y posteriormente a Estados Unidos.
- La presencia de cultivos ilícitos (Organización de las Naciones Unidas, 2007).

Los hechos anteriores han promocionado la violación sistemática del Derecho Internacional Humanitario, generando consecuencias graves para la situación humanitaria del Catatumbo; elementos que se materializa en las masacres, asesinatos selectivos, las retenciones, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, entre otros.

En términos del desplazamiento forzado y de acuerdo con el Sistema Único de Registro (SUR), en Norte de Santander se ha registrado el desplazamiento de 7.652 personas en el 2006, cifra superior a la registrada en el 2005 en el cual el número de desplazados era de 4.060 personas. Cabe mencionarse que esta situación no solo afectó a la población campesina, sino también a los líderes comunales y docentes.

Respecto a los principales centros de recepción y expulsión de la población; se destaca Cúcuta, Convección, El Tarra, Ocaña y Tibú. Consecuentemente con lo planteado por la Defensoría del Pueblo, un 70% de los desplazamientos ocurren en los municipios de la Provincia de Ocaña y El Catatumbo.

En lo que respecta a los índices de pobreza multidimensional en las condiciones educativas del hogar, se estableció que la privación promedio en la región del Catatumbo es de 83%, lo cual representa un bajo nivel de escolaridad de las personas mayores de 15 años. De los municipios que hacen parte de dicha región, es Hacarí y Teorama los que representan la menor escolaridad con un total de 4.897 hogares.

Son estos dos municipios a su vez quienes registran las mayores tasas de analfabetismo con 63% y 60% simultáneamente. Por su parte, los de menor índice de analfabetismo son los municipios de Ocaña y Sardinata con 28% y 40% respectivamente (Ver Figura 1).

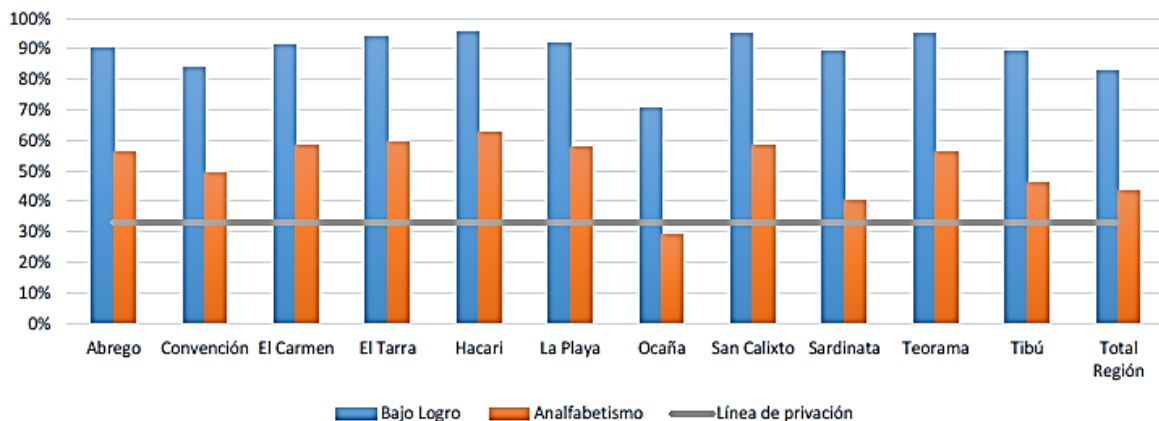


Figura 1. índices de pobreza multidimensional en las condiciones educativas del hogar. Fuente: (Ruiz, 2014)

Bajo la dimensión de condiciones de la niñez y de la juventud, se establece que es Hacarí, San Calixto y El Tarra quienes registran la mayor tasa de rezago escolar con 52%, 50% y 49% respectivamente. En términos de barreras de acceso a servicios para el cuidado de la primera infancia, son nuevamente Hacarí y El Tarra los que definen las mayores tasas con 44% y 40%.

La inasistencia escolar es más alta en los municipios del Tarra con 30% y Hacarí con 25%: mientras que las menores tasas se encuentran en Sardinata con 15% y Ocaña con 7%. Por último, el trabajo infantil es superior en Hacarí con 18%, seguido de El Tarra y San Calixto con 12%.

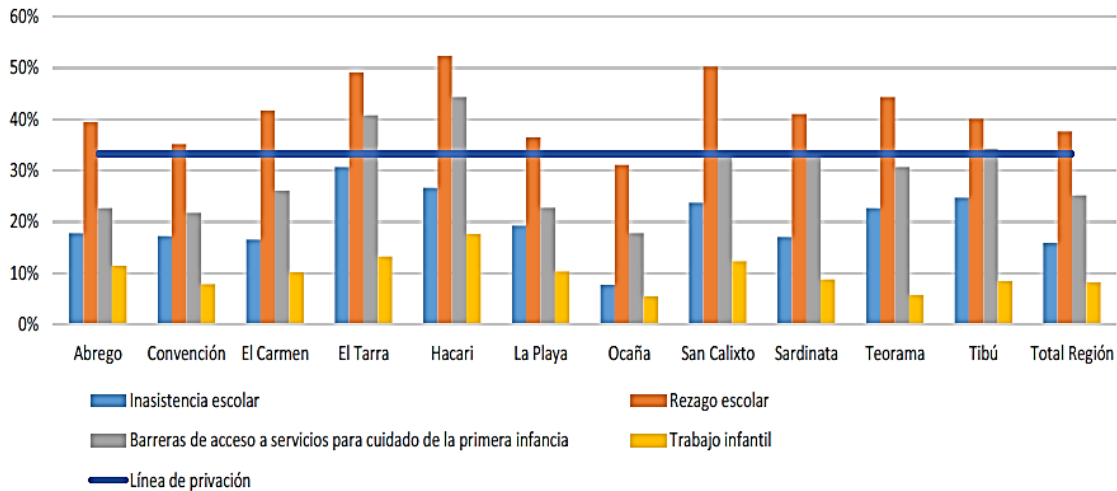


Figura 2. índices de pobreza multidimensional-Educación. Fuente: (Ruiz, 2014)

En términos de trabajo, la tasa más alta de dependencia económica se registra en Teorama con un porcentaje del 62%, seguido por Tibú con 59% y Ábrego con 58%. Uno de los factores de preocupación se relaciona con la tasa del empleo informal; considerando que el promedio de la informalidad en la región alcanza el 98%; siendo Ocaña el que registra la menor tasa con 95% (Ver Figura 3).

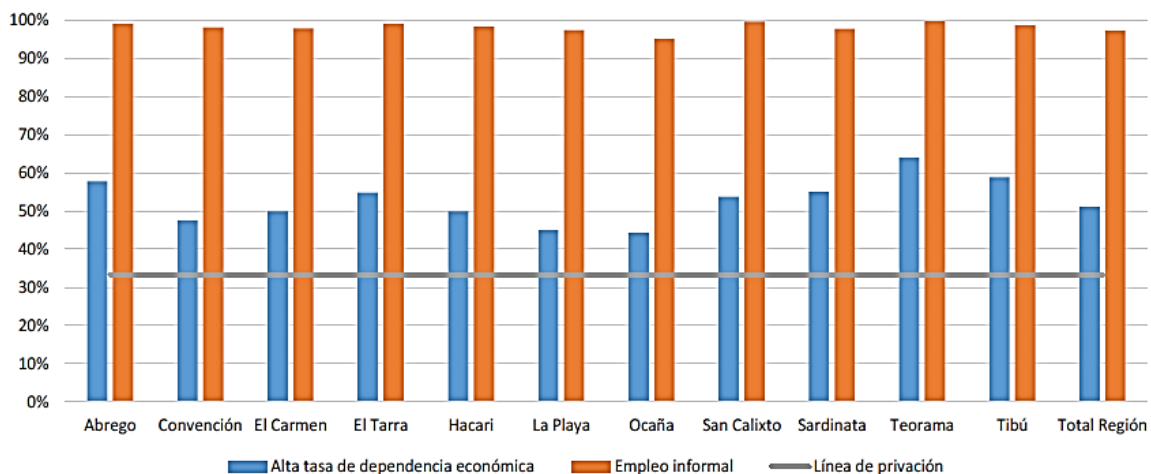


Figura 3. índices de pobreza multidimensional-empleo. Fuente: (Ruiz, 2014)

Respecto al acceso a la salud, es Sardinata quien cuenta con la mayor tasa de personas sin aseguramiento con una tasa de 54%, seguido por el Tarra y Hacarí con 52%. Teorama por su parte

tiene la mejor tasa de personas sin aseguramiento con 15%. Ahora, los mayores índices de barreras en el acceso al servicio de salud se dan en Hacarí con 28%, seguido por El Tarra con 24%.

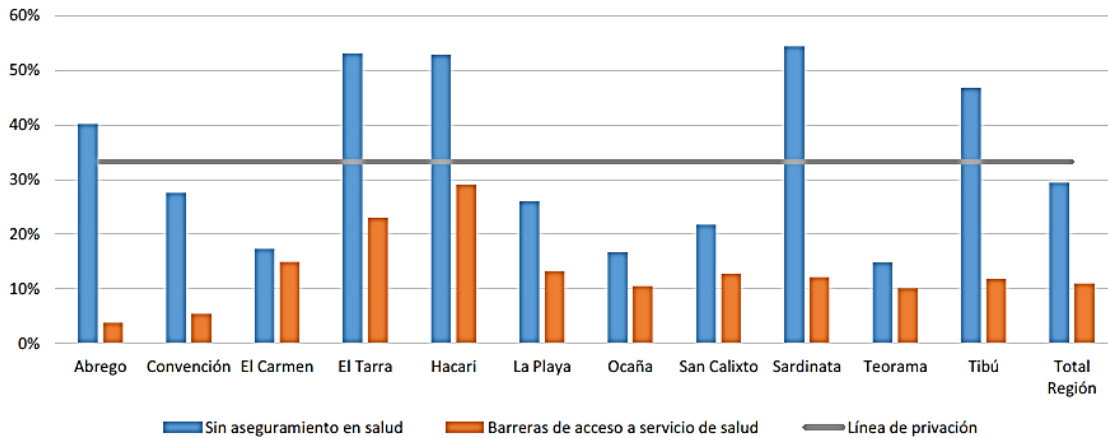


Figura 4. índices de pobreza multidimensional-Servicio de salud. Fuente: (Ruiz, 2014)

En cuanto al acceso al agua mejorada, son los municipios de San Calixto, Teorama y Hacarí quien poseen la mayor tasa de personas sin acceso al servicio, ello con un porcentaje de 71% y 70% respectivamente. Respecto a inadecuados eliminación de excretos, es Hacarí y Teorama donde se registra las mayores tasas, esto con 68% y 58% de los hogares. El mayor número de paredes inadecuadas se registran en Tibú con 8%; los mayores hacinamientos se previeron en el Tarra con 42% y San Calixto con 38%. Finalmente, el mayor número de pisos inadecuados se registran en Hacarí con 51% y El Carmen con 40%.

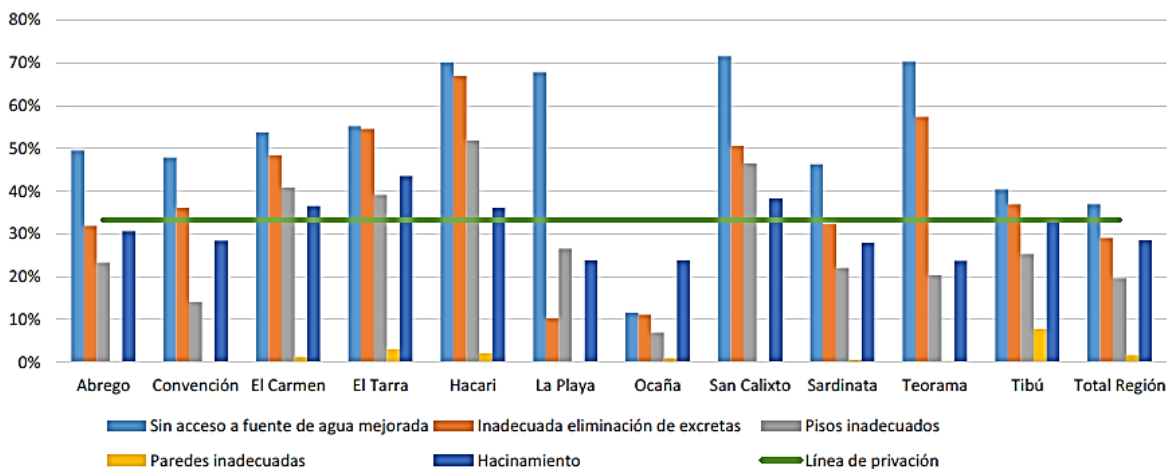


Figura 5. índices de pobreza multidimensional-Acceso a servicios. Fuente: (Ruiz, 2014)

En cuanto a la pobreza multidimensional, en el sector rural se prevee un porcentaje superior en comparación al área urbana, esto para todos los municipios que constituyen la región del

Catatumbo. En dicha medida es el Tarra quien tiene la mayor tasa de pobreza multidimensional rural y urbana con 98% y 81,2% respectivamente. En el sector rural le sigue en dicha medida el municipio de Hacarí con 96,7% y Sardinata con 93,8%. Por su parte en el área urbana, los índices más altos después El Tarra le sigue Tibú con 72,2% y San Calixto con 71,6% (Ver Figura 5).

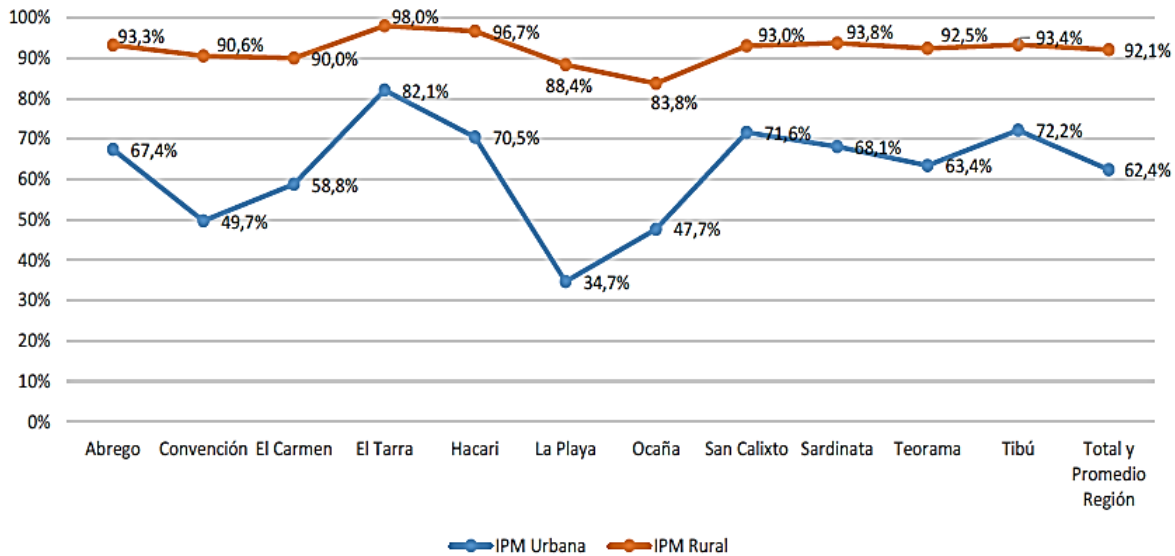


Figura 6. índices de pobreza multidimensional general. Fuente: (Ruiz, 2014)

6.2 Actividades petroleras en el Departamento de Norte de Santander

La historia comercial en Colombia surgió a partir de dos grandes concesiones que se firmaron en 1905; la concesión de Mares en el departamento de Santander y la concesión Barco en el departamento de Norte de Santander, explícitamente en la región del Catatumbo.

En dicho momento, la concesión Barco ejecutó actividades petroleras en un área de 400.000 hectáreas, esto por medio del Contrato Chauv Folson, que era operado por la compañía Colpet. Así mismo y por medio de la empresa SAGOC, se ejecutó el transporte de crudo por oleoducto, yendo dicha estructura desde el municipio de Tibú hasta Coveñas, siendo el objetivo final los mercados internacionales.

Ahora, aunque en el departamento se ejecutó una de las primeras transacciones comerciales en el sector de hidrocarburos; Norte de Santander no se consolida como principal productor en el país; es así que se encuentran muy por debajo de los primeros cinco productores de hidrocarburos, que son Meta, Casanare, Arauca, Santander y Boyacá. De manera explícita, Norte de Santander

ocupa el puesto 11 en producción; y a su vez su PIB departamental no se centraliza en tal rama productiva. Aun así, cabe destacarse que se han registrado incrementos relevantes en la producción anual, pasando de 3427 barriles en el 2010 a 4445 en el 2013.

Tabla 1. Producción petrolera en Norte de Santander

Departamento	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014*
Norte de Santander	1226	1333	1259	1165	2195	2771	3427	3758	4136	4445	2674
Total general	527 603	526 219	527 409	531 094	587 657	670 603	785 864	915 263	944 119	1 008 365	982 919

Fuente: (Ministerio de Minas y Energía, 2015)

La producción de petróleo en Norte de Santander se centraliza en la denominada Cuenca del Catatumbo, la cual es otra de las cuencas sedimentarias que concentra una baja producción (0,4% del total de crudo producido en el país en siete campos), y posee una extensión de tan solo 7.715 km².

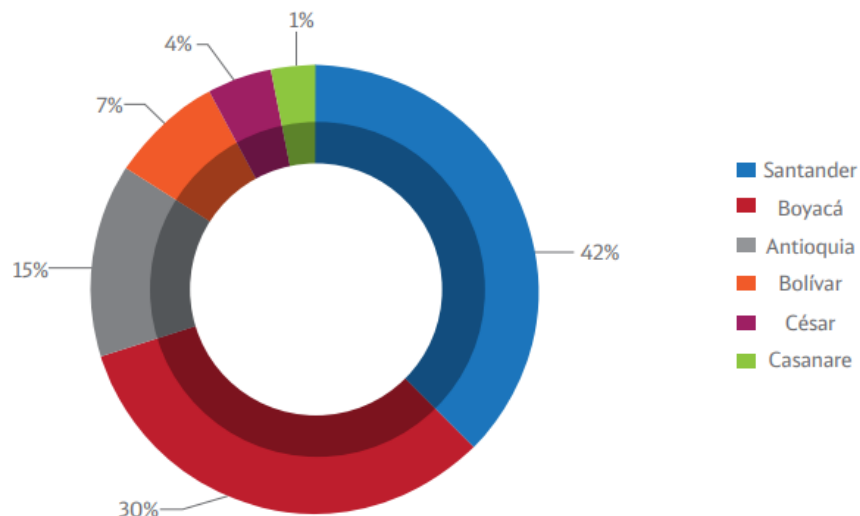


Figura 7. Aporte de las cuencas en la producción nacional de hidrocarburos. Fuente: (Malagón, 2016)

En lo que respecta al tipo de crudo, el 85,7% del crudo que se extrae en esta zona son crudos medianos y el 14,3% crudos livianos. Dicha tendencia se debe a la porosidad de las rocas, tasa que oscila entre 0,5% y 14% o denominada porosidad baja-media, aspecto que impide que se acumulen demasiados hidrocarburos.

6.3 Estrategias de intervención para mejorar los índices de pobreza en el sector rural

Desde el punto de vista del postconflicto y en función con el Acuerdo de Paz con el grupo guerrillero de las Farc-EP; se establece una serie de principios de la Reforma Rural Integral las cuales se asocian con: transformación estructural, bienestar y buen vivir, priorización, integralidad, restablecimiento, regularización de la propiedad, participación, desarrollo sostenible, presencia del Estado, democratización del acceso y uso adecuado de la tierra.

De acuerdo a lo descrito anteriormente, se establece un comparativo en la Tabla 2. En el que se relaciona los principios de la reforma integral, los principios o dimensiones de la Responsabilidad Social Empresarial, los índices de pobreza multidimensional y las estrategias de las petroleras de la región, explícitamente Ecopetrol, quien es la principal empresa que tiene su accionar en el Catatumbo:

Tabla 2. Estrategias RSE basadas en el postconflicto y los índices de pobreza

Principio de la Reforma Integral	Definición del principio	Principio o Dimensión de la RSE	Factor o Índice de pobreza	Estrategias de las petroleras
Transformación estructural	Busca la transformación de la realidad rural con equidad y democracia.	Comunidades locales	Empleo	Ecopetrol tiene dentro de su marco legislativo el promover la contratación local de talento humano, incluyendo a los miembros de los grupos étnicos, basados en el respeto al derecho a la no discriminación.
Bienestar, buen vivir y priorización	Busca erradicar la pobreza y satisfacer las necesidades de la ciudadanía de las zonas rurales, permitiéndole ejercer plenamente sus derechos en convergencia con la calidad de la vida urbana y la calidad de la vida rural; esto bajo un enfoque territorial y la diversidad étnica y cultural de las comunidades.	Comunidades locales	Servicios de Salud y Educación Acceso a servicios públicos	Implementación de programas que complementan y fortalecen la oferta pública en salud y educación. Realización de inversiones para que se garanticen el acceso al gas natural y fuentes seguras de energía para poblaciones de bajos ingresos. Apoyo a los gobiernos municipales y departamentales para la priorización y estructuración de proyectos estratégicos de inversión.
Integralidad	Se promueve la productividad a través de programas que acompañan el acceso efectivo a la tierra, innovación, ciencia y tecnología, asistencia técnica, entre otros. También se promueve el acceso a los bienes públicos como salud, vivienda, educación, infraestructura y conectividad.	Socios comerciales, proveedores y consumidores	Empleo	Apoya proyectos productivos sostenibles y fortalece empresas asociativas rurales. Genera entornos favorables para el emprendimiento y actividad empresarial en los municipios donde opera; ajustándose a las condiciones y necesidades puntuales de cada territorio. Genera condiciones para que las empresas locales participen en la cadena de suministro de Ecopetrol.
Participación	Se planea, ejecuta y realiza seguimiento a los planes y programas con la participación de las comunidades.	Grupos de opinión, administraciones públicas, comunidades locales y sociedad	Empleo Servicios de Salud y Educación	Promoción de espacios de diálogos y de construcción con organizaciones locales como Juntas de Acción Comunal y colectivos de ciudadanos. Fortalecimiento de la identidad local por medio del fomento y apoyo a expresiones culturales de los territorios.
Desarrollo Sostenible	Se protege y promueve el acceso al agua y al desarrollo ambiental y social sostenible de las regiones, bajo una concepción ordenada del territorio.	Problemas ecológicos mundiales	Hábitad, vivienda y ambiente sano	Implementar iniciativas que lleven a conservar los ecosistemas estratégicos y fuentes hídricas. Prevenir, controlar, mitigar y compensar los potenciales impactos ambientales que pueden generarse en las operaciones de la empresa. Contribuir al mejoramiento de la calidad ambiental de las regiones en donde operan. Contribuir a la viabilidad ambiental y social de las operaciones y proyectos.
Restablecimiento	Se restablece los derechos de las víctimas del desplazamiento y del despojo.	Derechos humanos	Hábitad, vivienda y ambiente sano	Actividades de comunicación y formación en derechos humanos enfocados en temas como los objetivos del Desarrollo Sostenible, Seguridad y Derechos Humanos, Asuntos Étnicos y Cultura y Paz.

Fuente: Autor

Complementando lo dispuesto en la tabla anterior, se hace evidente enfatizar y promover otra serie de iniciativas. Uno de los puntos clave a impulsar en el desarrollo socioeconómico del campo colombiano y de igual forma en la región del Catatumbo se centraliza en la promoción de opciones de empleo para el campesinado. Como parte de ello, empresas como Ecopetrol S.A y el Ministerio de Minas y Energía han impulsado programas como el de Reconversión Socio-Laboral por medio del cual se busca brindar opciones de negocios diferentes a la venta ilícita de combustible; actividad económica que se viene desarrollando en la frontera con Venezuela.

De igual forma, dicha propuesta tiene como propósito el generar un cambio de actividad y de la actitud de la población hacia actividades productivas y competitivas en la región; por medio del cual se favorezca la cultura de la legalidad y la institucionalidad. Bajo esta premisa, se han desarrollado mecanismos como la sensibilización e inducción, la formación integral, el fondo de crédito y capital semilla, la incubación de negocios, comunicación y apoyo psicosocial (Ministerio de Minas y Energía, 2014).

En el caso puntual de Norte de Santander, dicha propuesta favorece a 4.046 personas en 12 municipios del departamento, en los que se encuentran algunos que constituyen la región del Catatumbo: Cúcuta, Los Patios, Villa del Rosario, Puerto Santander, El Zulia, La Y, Sardinata, La Sanjuana, Tibú, Pamplona, Ocaña y Abrego.

En términos de generación de empleo a partir del talento local, los datos proporcionados por Ecopetrol explícitamente para el departamento de Norte de Santander no son conocidos, puesto que estos manejan dicha información a forma de conglomerado. En dicha medida, para el año 2016 Ecopetrol generó un promedio de 21.700 empleos, ello a través de sus empresas contratistas, siendo la cantidad de personas contratadas función de la dinámica misma de los proyectos y contratos.

La contratación de la mano de obra local sigue manteniendo una tendencia creciente, para el año 2016 del total de personas contratadas equivalió al 86%; siendo la región Central en donde se concentró el mayor número de trabajadores vinculados bajo esta modalidad, siendo un total de 10.100 trabajadores los incorporados a la compañía. De estos departamentos, es Norte de Santander y Santander en donde se concentra la mayor parte de las personas contratadas, esto con un total de 8.300 ocupaciones (Ecopetrol, 2016).

Por otra parte, debe hacer hincapié en que el programa de talento humano regional basa su sustento a la vez en un programa de formación para el futuro, por ende, se ha promovido procesos de certificación de competencias por medio de alianzas con el Sena y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), siendo estos campos de formación relacionados con electricidad, manejo ambiental, instrumentación, mecánica, obras civiles, sector agropecuario y soldadura (Ecopetrol, 2014).

En términos de servicios públicos, Ecopetrol dispuso la puesta en operación de una planta de gas en Norte de Santander, la cual posee una capacidad de suministro de 5 millones de pies cúbicos por día de gas natural, siendo los principales destinos la ciudad de Cúcuta y el municipio de Tibú, en donde se concentra las principales operaciones de exploración y explotación. De acuerdo con la empresa, este proyecto beneficia a cerca de 178.000 usuarios.

El objetivo principal de este proyecto como se afirma era incrementar la oferta de gas en la región, para lo cual fue necesario realizar en paralelo una inversión social de más de 1.200 millones de pesos, en el que se incorporó la firma del convenio de gas domiciliario con la administración municipal de Tibú y otros 260 millones en el mantenimiento de la red vial de la zona (Ecopetrol, 2012).

En el caso de la ciudad de Cúcuta, Ecopetrol S.A junto con el gobierno municipal ratificaron la disposición de recursos para el acueducto metropolitano, esto con un total de 188 mil millones por parte de la empresa petrolera y de 100 mil millones por parte del Ministerio de Vivienda.

Otros proyectos asociados explícitamente en el municipio de Tibú corresponde a la reconstrucción, mantenimiento, mejoramiento y adecuación de la institución educativa Marco Fidel Suarez, la modificación de la planta de sacrificio del municipio, la reconstrucción, mantenimiento, mejoramiento de otras cuatro instituciones educativas y el mantenimiento de la vía de Campos Dos a Campos Giles (Ecopetrol, 2017).

Por otra parte, Ecopetrol junto con la Federación Nacional de Cafeteros han promovido proyectos para el fortalecimiento de los caficultores de Norte de Santander, para lo cual se destinó cerca de 960 millones de pesos enfocados en la renovación de cultivos resistentes a la roya, un café tipo exportación. El proyecto en mención tenía como beneficiarios cerca de 630 cultivadores de café de los municipios de Toledo, El Carmen y Convención.

Sumado a lo anterior, los beneficiarios también recibieron capacitación de buenas prácticas agrícolas, formación que permitió la vinculación a programas de cafés certificados y sostenibles, con lo cual se permite producir granos de alta calidad; aspecto que ha llevado a que el café producido en el departamento, cerca del 90% se exporte a países como Estados Unidos, Japón e Italia (Inteligencia Petrolera, 2015).

En cuanto a programas ambientales, Ecopetrol ha promovido programas como el de reforestación, con lo cual se busca preservar especies endémicas de la región, tales como el cedro y el cañaguatate. En dicho orden, para el año 2014 se impulsó la siembra de 15 mil árboles que promovió la regeneración de oxígeno y el establecimiento de la fauna y flora, creándose corredores biológicos para la conexión de bosques secundarios que posibilite el tránsito de las especies de un sitio a otro.

Así mismo, se han desarrollado talleres ambientales especialmente en las escuelas del municipio de Tibú, en donde los estudiantes se han beneficiado de las charlas en pro de la configuración de conciencia sobre el respeto y el cuidado de los recursos naturales. En el sector educativo se entregaron alrededor de 8000 plántulas y cerca de una tonelada de abono orgánico para el incentivo de la siembra de árboles (Mora, 2015).

Conclusiones

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es una herramienta dispuesta por las compañías para mejorar la forma de hacer empresa, y en donde se incluye la mejora de las condiciones sociales para las comunidades en las cuales centran sus actividades operativas. En el caso puntual del posconflicto, la RSE tiene su sustento en diseño, construcción e implementación de estrategias que permitan la reintegración de quienes hicieron parte de la guerra, y su incorporación al mundo laboral; así como la creación y recuperación de las condiciones sociales del sector rural.

En la ruralidad, generalmente la zona más afectada en un conflicto armado, la RSE posee gran relevancia ya que a través de esta es posible generar nuevos mecanismos para solventar las necesidades que se han generado a lo largo de la historia y que el Estado no ha logrado cubrir. De forma paralela, se le brinda la posibilidad mejorar su calidad de vida a los habitantes de la zona influida, a través de nuevas oportunidades laborales, la ampliación de los servicios públicos, la reducción en la tasa de analfabetismo y la tecnificación de sus labores productivas, entre otros.

Por eso al evaluar el alcance de la RSE como parte de la reincorporación y reestructuración de la sociedad colombiana, se destaca que en conjunto con el sector privado, y como parte del proceso de paz, se impulsó el desarrollo del sector rural por medio de una reforma integral que no solo busca permitir el regreso de los campesinos desplazados a sus territorios, sino proveerles herramientas que les posibilitarán tener una mejor calidad de vida.

En casos similares como los posconflictos peruano y salvadoreño, en donde se evidenciaron dichas fallas, las herramientas y estrategias impulsadas o relacionadas con la aplicación de la RSE, en la reestructuración del sector rural, por ser los renglones que representan las mayores problemáticas de desigualdad social y pobreza; no lograron alcanzar sus objetivos, ni entregar todos sus beneficios, ante la falta de articulación con la política estatal de intervención.

Sin embargo, hay muchos vacíos y puntos sin resolver frente a lo que se ha llamado “la improvisada” implementación de los acuerdos, que está retardando y poniendo en juego la posibilidad de transformación real y profunda en las regiones afectadas por el conflicto.

En esa línea y durante el análisis del capítulo especial sobre “Reforma Rural Integral” del acuerdo de paz, se identificaron ejes específicos que se asocian con la transformación estructural, el bienestar, buen vivir y priorización, la integralidad, la participación, el desarrollo sostenible y el restablecimiento de los derechos y condiciones de vida de los pobladores afectados.

Tomando como eje de investigación la región del Catatumbo, al oriente de Colombia, donde el conflicto es latente y el posconflicto es esperado; y en donde se realizan actividades de explotación y transporte de hidrocarburos por lo que es relevante evaluar la forma en que empresas

como Ecopetrol, a través de sus políticas de Responsabilidad Social Empresarial puede impulsar el desarrollo rural. Esto con base a los principios de reparación integral y la lucha por reducir los factores de pobreza multidimensional.

Ecopetrol, en este caso, ha promovido la aplicación de diferentes herramientas en la región del Catatumbo, destacándose entre estas la promoción de empleo en la región por medio de la incorporación de capital humano local, la creación de proyectos productivos de mano con el gobierno local, a través del cual se le da a los campesinos herramientas técnicas y de formación que les permitan hacer realidad sus sueños. Todo esto, en consecuencia y alineado a sus principios de RSE en torno al apoyo a las comunidades locales, a los socios comerciales y consumidores, al abordaje de los problemas ecológicos mundiales y al respeto por los derechos humanos.

Los programas desarrollados en municipios como Tibú (Norte de Santander), en donde se amplió la cobertura de salud y académico en el sector rural, y en donde se ha promovido la participación de la comunidad en torno a la cultura de la paz, buscan que los campesinos trabajen en la definición y puesta en marcha de sus proyectos personales pero que a la vez sean ellos quienes evalúen las transformaciones y beneficios ecológicos y culturales que los caracterizan.

Bibliografía

- Acevedo, J., Zárate, R., & Garzón, W. (2013). *Estatus jurídico de la Responsabilidad Social Empresarial en Colombia*. Bucaramanga: Universidad Industrial de Santander.
- Acevedo, R., Márquez, L., & Rivera, Á. (2012). *La empresa en el postconflicto: una visión desde la Teoría de la Gobernanza y la Responsabilidad Social Empresarial*. Cali: Universidad de San Buenaventura.
- Baltazar, C. (2003). *¿Cómo promover la responsabilidad social empresarial?* Lima: Papeles de Ética, Economía y Dirección.
- Barrios, R. (2014). *Responsabilidad social empresarial: el papel de las organizaciones en el postconflicto colombiano*. Barranquilla: Universidad de Atlántico.

- Burgos, J. (06 de 01 de 2016). *En el postconflicto el mayor reto está en la educación*. Recuperado el 12 de 11 de 2017, de <http://capitalhumano.com.co/actualidad/en-el-posconflicto-el-mayor-reto-esta-en-la-educacion-4990>
- Calderón, R., & Castro, J. (2014). *Acciones de responsabilidad Social Empresarial de las Agro-Empresas ganaderas del municipio de Puerto López, (Meta)*. Bogotá D.C: Universidad de La Salle.
- Cárdenas, N. (2016). *Responsabilidad social empresarial: Un análisis de la reinserción laboral en el post conflicto en Colombia*. Bogotá: Universidad Militar Nueva Granada.
- Dajani, A., Yossi, D., & Celine, T. (2006). *Israel and Palestine: doing business across the conflict divide*. Londres: International Alert.
- De Zubiría, S. (2014). Del conflicto armado al conflicto político en Benjamín y Freud. *Revista Colombiana de Bioética*, 9(2), 107-116.
- Defensoría del Pueblo. (2006). *SITUACIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL DE LA REGIÓN DEL CATATUMBO – NORTE DE SANTANDER*. Bogotá D.C.
- Delgado, M., & Salgado, M. (2009). *Crisis y pobreza rural en América Latina: el caso de El Salvador*. Santiago de Chile: Documento de Trabajo N° 44. Programa Dinámicas Territoriales Rurales.
- Departamento Nacional de Planeación. (2015). *Diagnóstico de la pobreza rural en Colombia, 2010-2014*. Bogotá D.C: DANE.
- Drucker, P. (1985). *Innovation & Entrepreneurship: Practice and Principles*. Boston: Butterworth.
- Fayol, H. (1981). *Administración industrial y general*. Paris: El Ateneo.
- Fernández, C. (2010). *La empresa como actor de la reconstrucción postbélica*. Oficina de Naciones Unidas en Santo Domingo.
- Fraenkel, J., & Wallen, N. (1996). *How to design and evaluate research in education*. New York: McGraw-Hill.
- Friedman, M. (1970). *The social responsibility of business is to increase its profits*. New York: The New York Time Magazine.
- Galindo, Y. (2016). *La responsabilidad social empresarial y su aplicación en el postconflicto en Colombia*. Bogotá: Universidad Militar Nueva Granada.
- González, J. (2013). *Los efectos sociales y económicos de la responsabilidad social empresarial en una organización de hidrocarburos el municipio de Puerto Gaitán (meta). El caso de*

- las veredas Santa Bárbara y Guasipaty entre 2009 y 2011*. Bogotá D.C: Pontificia Universidad Javeriana Facultad De Estudios Ambientales Y Rurales Maestría En Desarrollo Rural.
- Hennchen, E. (2012). *El papel del sector extractivo en el desarrollo sostenible y la paz en Nigeria: el caso de Royal Dutch Shell*. London School of Economics.
- Malagón, J. (2016). *La competitividad del sector de hidrocarburos en las diferentes regiones de Colombia*. Bogotá D.C: Cuadernos PNUD.
- Mariño, A. (2015). *RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (RSE) COMO RESPUESTA DE LA GRAN EMPRESA COLOMBIANA A UN ENTORNO DE CONFLICTO ARMADO Y POSCONFLICTO EN COLOMBIA*. Bogotá D.C: XX Congreso Internacional de Contaduría, Administración e Informática.
- Maslow, A. (1954). *Motivación y personalidad: la jerarquía de las necesidades básicas*. Barcelona: Kairos.
- Mediaresponsable. (2011). *Los informes de sostenibilidad: presente y futuro*. Mediaresponsable.
- Melgar, E., Morales, E., Hirezi, F., & Alens, J. (2017). *Darrollo rural en El Salvador: una propuesta de política pública para la reactivación de la agricultura*. Cuscatlán: Universidad Centroamericana José Simón Cañas.
- Ministerio de Minas y Energía. (2014). *Hidrocarburos*. Bogotá D.C: Memorias al Congreso de la República.
- Ministerio de Minas y Energía. (2015). *Diagnóstico Socioeconómico de Norte de Santander*. Bogotá D.C: Estrategia Territorial para la Gestión Equitativa y Sostenible del Sector Hidrocarburos.
- Moreno, A. (2015). *LA EMPRESA COMO PIEDRA ANGULAR DEL POSTCONFLICTO EN COLOMBIA*. Bogotá D.C: UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA.
- Nopel, W. (2008). *Responsabilidad Social Empresarial Aplicaciones En El Sector Agropecuario*. Bogotá D.C: Universidad de La Salle.
- Olivella, L. (2009). *De La Responsabilidad Social Empresarial Y Su Articulación Política Para La Educación De Los Niños Del Sector Rural Fundación Escuela Nueva: Volvamos A La Gente*. Bogotá D.C: Pontificia Universidad Javeriana.
- Organización de las Naciones Unidas. (2007). *Ficha Técnica: Departamento de Norte de Santander (Catatumbo)*. Sala de Situación Humanitaria.

- Parra, R., Ordoñez, L., & Acosta, C. (2013). Pobreza, brechas y ruralidad en Colombia. *Coyuntura económica*, 43(1), 15-36.
- Pecaut, D. (2015). Una lucha armada al servicio del status social y político.
- Pérez, E., & Pérez, M. (2002). El sector rural en Colombia y su crisis actual. *Cuadernos de Desarrollo Rural*, 35-58.
- Pérez, T. (2001). *Conflicto y posconflicto: una mirada a la política de seguridad democrática*. Separata Humanística; vol. 5, N° 10. Recuperado de: <http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo> .
- Perry, S. (2010). *La pobreza rural en Colombia*. Bogotá D.C: Centro Latinoamericano para el desarrollo rural.
- Peru Opportunity Fund. (2011). *Diagnóstico de la Agricultura en el Perú*. Perú: Libélula.
- Quecedo, R., & Castaño, C. (2002). Introducción a la metodología de investigación cualitativa. *Revista de Psicodidáctica*(14), 5-39.
- Rettberg, A. (2006). *Local Businesses' Role in Formal Peace Negotiations*. Londres: En Local Business, Local Peace: the Peacebuilding Potential of the Domestic Private Sector.
- Rettberg, A. (2007). Business and Peace in El Salvador, Guatemala, and Colombia. *En Journal of Latin American Studies*, 39(3), 463-494.
- Rettberg, A. (2010). *La participación del sector privado en la construcción de paz: inventario e identificación de algunos ejemplos ilustrativos*. La RSE en contextos de conflicto y postconflicto: de la gestión del riesgo a la creación de valor.
- Ruiz, E. (2014). *Análisis de las condiciones de desarrollo humano en la región del Catatumbo colombiano*. Bogotá D.C: Universidad de La Salle.
- Sandoval, C. (2002). *Investigación cualitativa*. Bogotá D.C: Instituto Colombiano para el Fomento De la Educación Superior.
- Sepúlveda, M., Moreno, E., Tovar, J., Franco, J., & Villarraga, C. (2015). Responsabilidad social de las PyMEs en el marco del posconflicto, como soporte para la inclusión laboral de la población reinsertada. *Revista de Ciencias Sociales*, 6(1), 45-61.
- Taylor, C. (1995). The Economics of Breakdowns, Checkups, and Cures. *Political Economy*(103), 53-74.

- Vecino, J. (2015). *El papel de las organizaciones en el posconflicto colombiano*. Recuperado el 18 de 11 de 2017, de <https://www.gestiopolis.com/el-papel-de-las-organizaciones-en-el-posconflicto-colombiano/>
- Vega, R. (2015). *La injerencia de los Estados Unidos, Contrainsurgencia y Terrorismo de Estado*. Bogotá D.C: Universidad Pedagógica Nacional.
- Vera, L., & Ponce, P. (2012). *La investigación cualitativa*. Buenos Aires: Universidad Nacional de la Plata.
- Vergara, M. P., & Vicaría, L. (2009). *Ser o aparentar la responsabilidad empresarial en Colombia: Análisis organizacional basado en los lineamientos de la Responsabilidad Social Empresarial*. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.
- Villafán, K. (2014). Responsabilidad social de las empresas agrícolas y agroindustriales aguacateras de Uruapan, Michoacán, y sus implicaciones en la competitividad. *Contaduría y Administración*, 59(4), 223-251.